



MEMORIA 2011

MEMORIA 2011

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, atribuye en su artículo 70.1.20ª: la competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma *“en materia de comercio interior, sin perjuicio de la política general de precios, de la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de la competencia”*, que, de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional expresada a través de la Sentencia de 11 de noviembre de 1999, incluye la materia de defensa de la competencia.

Según lo dispuesto en el artículo 70.1.21º del Estatuto corresponde en exclusiva a la Comunidad de Castilla y León la *“promoción de la competencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma”* sin perjuicio de la que tiene atribuida la Comisión Nacional de la Competencia en todo el territorio nacional.

Asimismo, a través del artículo 76.15º del Estatuto, la Comunidad Autónoma asume dentro de las competencias de ejecución, *“la defensa de la competencia respecto de las actividades económicas que se desarrollen en el territorio de la Comunidad, pudiendo crearse con esa finalidad un órgano independiente”*.

Por su parte el Decreto 15/2009, de 5 de febrero, por el que se regula el ejercicio de funciones de la Comunidad de Castilla y León en materia de defensa de la competencia, establece las bases del modelo de defensa de la competencia en la Comunidad de Castilla y León, complementado por determinados artículos del Decreto 33/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Empleo, constituye el cuerpo normativo por el que se establecen las funciones del Servicio para la Defensa de la Competencia y del Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León.

El Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León (TDC) se creó por Decreto 36/2006, de 25 de mayo, por el que se atribuye la competencia en materia de defensa de la competencia, ejerciendo las funciones en esta materia de conformidad con lo establecido en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas.

A través de la creación de un órgano propio de defensa de la competencia en Castilla y León se consiguen los siguientes fines:

- Eliminar posibles trabas a la libre competencia como forma de optimizar y mejorar los mercados a favor de los operadores y de los consumidores y usuarios, permitiendo mejoras en la competitividad y en la innovación sectorial y en definitiva favoreciendo una mayor actividad económica.

- La existencia y actuación del Tribunal proporciona a la Junta de Castilla y León un mayor conocimiento de la realidad económica de Castilla y León, posibilitando la corrección de las posibles vulneraciones a la competencia.
- Favorecer la actuación de la Administración tendente a dar cabida en su normativa y actuación a los principios rectores de la libre competencia, mejorando así las relaciones entre los operadores y las de éstos con la Administración autonómica.
- El Tribunal actúa en colaboración y coordinación con la Comisión Nacional de la Competencia, que se plasma en la participación en el Consejo de Defensa de la Competencia, en los 5 Grupos de Trabajo creados en la Comisión Nacional de la Competencia y en el uso de la aplicación REC (Red de Competencia) en la que se encuentran conectados y compartiendo bases de datos todos los órganos de defensa de la competencia autonómicos y la propia CNC.

1- MARCO JURÍDICO

Tal y como hemos señalado anteriormente, el marco jurídico sobre el que se ha desarrollado la actividad de este Tribunal está constituido fundamentalmente por las siguientes normas:

A) Normas aprobadas por el Estado:

Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia.

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia.

B) Normas aprobadas por la Comunidad Autónoma:

Decreto 72/2007, de 12 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Empleo. Fue sustituido en julio de 2011 por el *Decreto 33/2011, de 7 de julio*, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Empleo.

Decreto 15/2009, de 5 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las funciones de la Comunidad de Castilla y León en materia de defensa de la competencia.

Orden EYE/937/2008, de 6 de junio, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Consejería de Economía y Empleo.

Orden, de 3 de marzo de 2010, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se establece lo dispuesto en el apartado tercero de la disposición adicional primera del *Decreto 15/2009, de 5 de febrero*, por el que se regula el ejercicio de las funciones de la Comunidad de Castilla y León en materia de defensa de la competencia.

C) Normas aprobadas por el propio Tribunal:

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Tribunal, aprobado por *Acuerdo de 4 de junio de 2010* y publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León de 4 de agosto de 2010.

Acuerdo, de 15 de enero de 2010, por el que se aprueba el Plan de actuaciones del Tribunal correspondiente al año 2010-2011.

2. ORIGEN

Como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de noviembre de 1999, se dictó la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia, contemplándose la creación de órganos destinados a dicha finalidad en las Comunidades Autónomas. De acuerdo con dicha Sentencia, a las Comunidades Autónomas con competencia en materia de comercio interior les corresponde el ejercicio de las funciones ejecutivas de intervención, autorización o sanción en asuntos relacionados con la libre competencia, cuando se trate de prácticas que afectan al ámbito territorial autonómico.

El Decreto 15/2009, de 5 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las funciones de la Comunidad de Castilla y León en materia de defensa de la competencia, complementado, en su momento, por determinados artículos del Decreto 72/2007, de 12 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Empleo (sustituido, desde julio de 2011, por el Decreto 33/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Empleo.), y de la Orden EYE/937/2008, de 6 de junio, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los servicios Centrales de la Consejería de Economía y Empleo, establece las bases del modelo de defensa de la competencia en la Comunidad de Castilla y León.

Estas normas, junto con el Decreto 36/2006, de 25 de mayo, atribuyen la competencia en esta materia a dos organismos de la Comunidad Autónoma:

1º La Secretaría General de la Consejería de Economía y Empleo, a través del Servicio para la Defensa de la Competencia, y

2º El Tribunal para la Defensa de la Competencia de la Comunidad de Castilla y León.

El Servicio para la Defensa de la Competencia ejerce las funciones de investigación, instrucción, seguimiento y vigilancia de los expedientes; mientras que el Tribunal desarrolla funciones resolutorias en los casos de conductas prohibidas, así como de tutela y de promoción pública de defensa de la competencia.

El Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León actúa con plena autonomía jerárquica y funcional, y ejerce sus funciones con plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico.

La creación del Tribunal y del Servicio proporciona una respuesta al ejercicio efectivo de la distribución de competencias en esta materia, como resultado de la Sentencia del Tribunal Constitucional 208/1999, de 11 de noviembre de 1999.

3. MEDIOS ADSCRITOS AL TRIBUNAL

El Tribunal para la Defensa de la Competencia de la Comunidad de Castilla y León está integrado por un presidente y dos vocales, designados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León a propuesta del Consejero de Economía y Empleo, por un período de cinco años, que podrá ser renovado, una sola vez, por un plazo de igual duración. Asimismo, actúa como secretario del Tribunal, con voz pero sin voto, un funcionario de la Consejería de Economía y Empleo.

El Tribunal cuenta con los recursos que a su demanda le proporciona la Secretaría General de la Consejería de Economía y Empleo.

Durante el año 2011 el Tribunal ha estado formado por:

A) Composición:

Presidenta:

Olga Ogando Canabal.

Acuerdo 82/2006, de 1 de junio, de la Junta de Castilla y León.

Vocales:

María Angustias Díaz Gómez.

Acuerdo 231/2007, de 31 de octubre, de la Junta de Castilla y León.

José María Caballero Lozano.

Acuerdo 231/2007, de 31 de octubre, de la Junta de Castilla y León.

Secretario:

Carlos Fajardo Casajús.

Orden EYE/114/2006, de 30 de junio.

B) Infraestructura:

El Tribunal no tiene asignado personal específico en la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta de Castilla y León. Ha contado con el apoyo del Servicio para la Defensa de la Competencia, integrado por el Jefe de Servicio, dos técnicos y una auxiliar. La sede del Tribunal se ubica en la Consejería de Economía y Empleo, calle Jesús Rivero Meneses, 3, 1ª planta, 47014 Valladolid.

4. FUNCIONES DEL TRIBUNAL

La competencia entre empresas contribuye a incrementar la eficiencia productiva y la mejora de los servicios, obteniendo precios más bajos para los ciudadanos y permite

alcanzar mayores beneficios, desde el punto de vista social, que los que se logran mediante las situaciones de monopolio. Sin embargo, en ocasiones, algunas empresas vulneran la competencia, por ejemplo, concertando los precios. En otras, pueden abusar de su posición de dominio en el mercado expulsando a los competidores o dificultando la entrada de otras nuevas empresas. En estas circunstancias, los perjudicados no son sólo los ciudadanos sino que también se ve afectada la eficacia general de la economía.

Por ello, en estos casos, se hace necesaria la intervención de las autoridades de competencia para garantizar el funcionamiento competitivo de los mercados y para que sus beneficios alcancen al conjunto de la sociedad.

Esta intervención se ejerce a través de varias funciones, asignadas al Tribunal para la Defensa de la Competencia:

- Función resolutoria.
- Función consultiva.
- Función tutelar y de promoción.

FUNCIÓN RESOLUTORIA

El Tribunal es el órgano de decisión en relación con las funciones resolutorias previstas en su norma de creación.

En particular, el Tribunal es el órgano competente para:

Resolver sobre la existencia de conductas o prácticas prohibidas, de naturaleza colusoria. De esta forma, el Tribunal puede impedir o anular todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado de Castilla y León.

Resolver sobre la existencia de conductas o prácticas prohibidas, de naturaleza abusiva. Así, el Tribunal podrá eliminar la explotación abusiva de posibles situaciones de dominio de las empresas que afecten al mercado de Castilla y León. En particular, la Ley 15/2007 prohíbe el abuso consistente en: imposición de precios; limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico lesivo para los intereses de las empresas o los consumidores; la negativa injustificada a vender productos o prestar servicios; la aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, perjudicando a ciertos competidores; o la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias extrañas al objeto principal de dichos contratos.

Resolver sobre la existencia de actos de competencia desleal que, por falsear la libre competencia en el mercado de Castilla y León, afecten al interés público.

Respecto a estas prácticas el Tribunal puede ordenar:

- a) La cesación de las mismas.
- b) La imposición de condiciones u obligaciones determinadas.
- c) La remoción de sus efectos.
- d) La imposición de multas.
- e) El archivo de las actuaciones en el supuesto de que no resulte acreditada la existencia de las mismas.
- f) Cualesquiera otras medidas cuya adopción autorice la Ley de Defensa de la Competencia.

FUNCIÓN CONSULTIVA

El Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León puede elaborar informes sobre materias relacionadas con la defensa de la competencia a requerimiento de las distintas Consejerías de la Junta de Castilla y León y otras Administraciones Públicas.

Por su parte, el Decreto 15/2009 recoge en los artículos, 5.g, 5.h y 5.i la competencia de emisión de otro tipo informes, relacionados con la incidencia de la regulación pública sobre la competencia y las concentraciones económicas, en este caso, cuando lo solicite la Comisión Nacional de Competencia.

FUNCIÓN TUTELAR Y DE PROMOCIÓN

El Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León tiene una función tutelar sobre la actividad de los mercados.

Finalmente, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Tribunal, aprobado por Acuerdo de 4 de junio de 2010 y publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León de 4 de agosto de 2010 contempla la posibilidad, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal de defensa de la competencia, de llevar a cabo la función de promoción, divulgación y defensa de la competencia, con el objetivo de fomentar en la sociedad castellana y leonesa una cultura de la competencia, factor que genera un impacto directo en la productividad y en el crecimiento de la economía regional.

5.- ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL

La actuación del Tribunal para la Defensa de la Competencia ha tenido lugar fundamentalmente a través de las sesiones plenarias, celebradas en número de diez a lo largo de 2011. Por otra parte, la Presidenta y los Vocales del Tribunal han desarrollado otras actividades en el ejercicio de su función. Seguidamente se exponen estas actividades.

A) Funcionamiento interno del Tribunal:

Acuerdo de 4 de febrero de 2011, sobre el inicio de los procedimientos sancionadores en materia de conductas prohibidas.

Acuerdo de 25 de marzo de 2011 por el que se aprueba la Memoria de Actuaciones correspondiente al año 2010.

B) Expedientes Sancionadores y Vigilancia de Resoluciones:

TDC/SAN/3/2008. NEVASA y ASOCIMAR.

Resolución de 24 de junio de 2011, relativa a la denuncia por incumplimiento de la Resolución sancionatoria de 8 de octubre de 2009.

El Tribunal a la vista de la documentación obrante, y fundamentalmente en los informes emitidos por el Servicio para la Defensa de la Competencia, no apreció incumplimientos de la Resolución de 8 de octubre de 2009 manifestados por los denunciantes.

Sin perjuicio de ello el TDC entendió que analizado el impreso de solicitud de inhumación que el familiar o representante del fallecido debe rellenar en las oficinas de Nevasa, se observa que en el mismo impreso figura la solicitud de enterramiento, que es obligatoria, que solo se puede presentar en las oficinas de Nevasa y sólo ésta conoce; y la solicitud de grabación de lápidas, servicio que puede ser llevado a cabo de modo concurrencial (criterio municipal exigido en la concesión) por diversidad de empresas marmolistas.

El TDC estableció la siguiente recomendación, *“la garantía de la adecuada elección por el usuario del operador de servicios de grabación parece exigir que en el citado impreso se haga constar de modo expreso, claro y evidente, que el servicio de grabación de lapidas que presta Nevasa es potestativo para el solicitante, mediante la cumplimentación de los datos consignados en el formulario, por lo que, si así lo deseara podrá elegir libremente cualquier otro operador del mercado.”*

TDC/SAN/3/2010. SERFUNLE.

Acuerdo de 29 de abril de 2011, sobre actuaciones complementarias a desarrollar por SERFUNLE, S.A., instando a esta empresa a una respuesta que se apoye en los datos que obligatoriamente deben figurar en el Libro Registro exigido por el Decreto 16/2005, de 10 de Febrero, por el que se regula la policía mortuoria en la Comunidad de Castilla y León.

Acuerdo de 21 octubre de 2011, por el que se devuelve al Servicio para la Defensa de la Competencia el expediente para que, si así lo estima oportuno, pueda acordar su acumulación con otro que está tramitando contra esa entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 del reglamento de defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero y el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de

Noviembre, re régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común..

TDC/SAN/1/2011, AYUNTAMIENTO DE SANCHONUÑO Y EMPRESA FUNERARIA SANTA TERESA, S.L.

Resolución de 3 de junio de 2011, por la que se procede a declarar la terminación convencional del expediente en los siguientes términos:

1º.- Recomendar a los Ayuntamientos de NAVALMANZANO y CANTIMPALOS la adopción de medidas de vigilancia y estricto cumplimiento de la LDC en la prestación de servicios de tanatorio en sus términos municipales, a los que la mercantil denunciada se ha sometido con vistas a la terminación convencional del expediente.

2º.- Que la empresa denunciada AGENCIA FUNERARIA SANTA TERESA, S.L., haga pública las medidas correctoras a que se ha sometido para poder terminar convencionalmente el expediente TDC/SAN/1/2011 en medio de comunicación de difusión provincial.

C) Otros acuerdos:

Acuerdo de 25 de febrero de 2011, por el que se da respuesta al escrito del Consejo de Colegios Profesionales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y León (CITICAL), relativo a la Orden AYG/767/2010, de 27 de mayo de 2010, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León.

Acuerdo de 11 de julio de 2011, por el que se da respuesta al escrito del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid en Valladolid, relativo a la Instrucción de la Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid sobre la aplicación de la inspección técnica de edificios.

D) Actividades internas de promoción de la competencia:

Estudio del documento «Resumen de los trabajos realizados durante el año 2010 en el Servicio para la Defensa de la Competencia», sesión 4 de febrero de 2011.

Estudio del documento «Informe del Servicio para la Defensa de la Competencia sobre la estructura de la distribución comercial en Castilla y León», sesión 4 de febrero de 2011.

Estudio del documento «El mercado de recogida de leche cruda de vaca en Castilla y León desde el punto de vista de la Competencia», sesión 4 de febrero de 2011.

E) Actividades externas de promoción de la Competencia:

Celebración de la Jornada sobre «La trasposición de la Directiva de servicios: retos pendientes», en Burgos, el 16 de marzo de 2011, en colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos (Aula «Caja de Burgos» de Estudios Empresariales).

Programa:

18.00 h. Presentación de la Jornada.

Alfonso Murillo Villar. Rector de la Universidad de Burgos.

Olga Ogando Canabal. Catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid. Presidenta del Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León.

18.15 h. Mesa redonda: “Distribución comercial y derecho de la competencia: campo de reformas”.

Joseba Aitor Echevarría Sáenz. Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid.

Juan Luis Crucelegui Gárate. Vicepresidente del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia.

Moderador: José María Caballero Lozano. Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de Burgos. Vocal del Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León.

19.15 h. Conferencia: “El proceso de transposición de la Directiva de Servicios en España: luces y sombras”.

Luis Berenguer Fuster. Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia.

Presentación: Olga Ogando Canabal. Presidenta del Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León.

F) Asistencia a reuniones de órganos nacionales de defensa de la competencia:

La Presidenta del Tribunal ha asistido a la reunión anual del Consejo de Defensa de la Competencia, celebrada el 2 de diciembre de 2011 en Madrid.